

Estatismo retrógrado

Por Jaime Guzmán

Considero esencial asegurar que la privatización de empresas actualmente en marcha se realice garantizando su transparencia y equidad.



Sin embargo, estimo deplorable que aún subsista en diversos sectores políticos tradicionales un enfoque retrógrado y trasnochado en la materia. Entre ellos destaca el argumento esgrimido esta semana por la Alianza Democrática, consistente en que "no se divisa qué razón existe para privatizar empresas que han estado perfectamente bien manejadas en manos del Estado".

A mi juicio, las razones son claras.

En primer lugar, no es tarea propia del Estado actuar como empresario, salvo respecto de aquellas actividades productivas que, siendo necesarias para el país, no puedan ser asumidas convenientemente por los particulares.

El razonamiento correcto es así exactamente inverso al de la Alianza Democrática. Lo que no se justifica es que una empresa permanezca en poder del Estado, si ella puede privatizarse adecuadamente.

Tal criterio, lejos de minimizar la importancia del Estado, favorece que éste se concentre con mayor eficiencia en las funciones indelegables que por su naturaleza le corresponden.

Además, en ello está comprometido uno de los pilares de una sociedad integralmente libre, porque cuando el principio de subsidiariedad se sustituye por el estatismo socializante, terminan afectándose el derecho de propiedad y la empresa privada.

En efecto, nuestra his-

toria registra ejemplos elocuentes de cómo los más agudos procesos expropiatorios y estatizadores de diversas actividades se han

fundado en el argumento de que la propiedad estatal de ellas significaría que "sus utilidades sean para todos los chilenos" o que "constituyan aportes al presupuesto nacional", concepto este último que acaba de reiterar la Alianza Democrática.

Por lo demás, en la práctica, tal supuesto es erróneo.

El buen manejo de las empresas estatales a partir de 1973, que hoy se reconoce, no fue la tónica predominante antes de esa fecha.

Las empresas estatales fueron y siempre serán un tentador instrumento para pagar favores electorales, hipertrofiando sus contrataciones de personal, o para validar medidas demagógicas, lo que se traduce en corruptela política y en un aumento del déficit del sector público generador de inflación, con especial daño para los más pobres.

También son estos últimos los más perjudicados con la retracción de las inversiones particulares que se produce en las áreas dominadas por empresas estatales, por el natural temor de que el Estado utilice su poder para asfixiar a sus competidores.

Los fundamentos conceptuales y prácticos para reducir el enorme tamaño del Estado empresario en Chile son los mismos que hoy favorecen ese proceso en el mundo occidental, salvo para quienes permanecen aferrados a anacrónicos dogmatismos socializantes.